

Sobre la consulta popular y las uniones civiles entre personas del mismo sexo

Por: Luis Carlos Ramírez Zamora
Presidente, Asociación Demográfica Costarricense

Ante la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones de realizar una consulta popular sobre la regulación en el país de las uniones civiles y de hecho entre personas del mismo sexo, la Asociación Demográfica Costarricense (ADC), como organización líder en la promoción del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en Costa Rica, se manifiesta totalmente en contra de dicho referendo.

A lo largo de 44 años hemos trabajado por el reconocimiento pleno de los derechos humanos que se basan en la libertad, la dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Realizar un referéndum sobre las uniones civiles de parejas del mismo sexo “que convoca a la mayoría heterosexual a decidir sobre los derechos de la minoría homosexual”, tal y como lo publicó un medio escrito de circulación nacional, es una violación a los derechos humanos y como organización de la sociedad civil debidamente establecida, apelamos a la rendición de cuentas de los diferentes entes que conforman el Estado costarricense involucrados en este proceso.

Los Estados tienen la obligación y triple compromiso de respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas. Particularmente los Estados están obligados a:

1. Respetar los derechos, lo que significa abstenerse de interferir directa o indirectamente en el disfrute de un derecho o conjunto de derechos en particular.
2. Proteger los derechos, lo que significa tomar medidas que prevengan que terceras partes interfieran con las garantías de los derechos humanos.
3. Garantizar el ejercicio de los derechos, lo que implica la adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales, promocionales y de otro tipo que sean apropiadas y estén dirigidas hacia la plena realización de los derechos.

En razón de lo anterior, someter a la población nacional a un referendo cuyo resultado es consabido por todos y todas es un atentado contra la efectiva aplicación de los derechos humanos en Costa Rica. En palabras sencillas, este programado referendo es burro amarrado contra tigre suelto. Así no proceden las democracias avanzadas.

De igual manera, ha quedado demostrado que en otros países, con sistemas democráticos avanzados y sociedades respetuosas de los derechos humanos y la diversidad, sus logros en esta materia lejos de provocar caos y descomposición, han contribuido a consolidar formas de convivencia más armoniosas y civilizadas.

El interés de la ADC, en relación con el reconocimiento de los derechos civiles relativos a la relación entre personas del mismo sexo, se sustenta en su accionar a lo largo de su trayectoria, y se sustenta en la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos de La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), que en su Artículo 1 dice que las personas tienen “Derecho a la igualdad, a una protección legal igualitaria y a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, la sexualidad o el género. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben gozar de la misma protección de la ley contra la discriminación con base en su sexualidad, sexo o género”.

Asimismo, dejamos manifiesto nuestro apoyo a la posición hecha pública de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica que tildó de discriminatoria e ilegal la inminente consulta y señala que “La convocatoria del referéndum y su eventual realización se constituyen en sí mismos en un acto de discriminación en perjuicio de esta población”.